

◀ EL procurador general, Alejandro Ordóñez, y el Fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, protagonizaron un fuerte debate en el foro 'Dilemas jurídicos del proceso de paz', en la Universidad Externado, el jueves pasado, en Bogotá.



EL PROCURADOR CONTESTÓ: "LO SALUDO DOCTOR MONTEALEGRE, QUE ESTÁ A MI SINIESTRA"

FOTO: FOTO CARLOS JULIO MARTÍNEZ SEMANA

Con trazos de ese lenguaje grecoquimbaya al que son tan proclives los juristas patrios, en un foro convocado por la universidad sobre dilemas jurídicos del proceso de paz, los dos altos funcionarios se lanzaron pullas memorables. "Señor procurador estoy a su izquierda estratégicamente", empezó el fiscal. El procurador contestó: "Lo saludo doctor Montealegre, que está a mi siniestra. Es evidente que usted está a mi izquierda".

El procurador mencionó que varios observadores internacionales han presentado objeciones al marco jurídico para la paz "y ellos no pertenecen a la nómina paralela de la Procuraduría General". El fiscal contestó que no tenía "procuradores a la sombra". Su oponente aclaró que no se refería a la Fiscalía, pero dijo que de pronto sí existían fiscales en la sombra y le pidió que no le "picara la lengua". Y cuestionó que el juez español Baltasar Garzón fuera asesor de la Fiscalía.

"Su concepto de justicia es de justicia penal del siglo XVIII, y conste señor procurador que estoy hablando del siglo XVIII y no del Medioevo". Ordóñez le contestó que él era un "realista jurídico". "Tengo que pedirle excusas, señor procurador—replicó Montealegre—. Yo lo veía a usted con una concepción del derecho del siglo XVIII, ahora lo veo 2.000 años atrás".

Pero, más allá de los dardos, esta no fue una discusión personal o retórica. El jueves se enfrentaron dos modelos jurídicos y filosóficos en uno de los cuales domina la palabra paz y en el otro la palabra justicia. Y sus argumentos fueron la encarnación académica de un debate que la sociedad misma empieza a hacer apasionadamente.

LAS DOS ORILLAS

El procurador sostuvo que el Marco Jurídico para Paz es "una caricatura que privilegia a los victimarios y sacrifica a las víctimas en el altar

de la impunidad", porque solo los crímenes sistemáticos serían sancionados. "Asesinatos que no sean sistemáticos, torturas que no sean sistemáticas, desapariciones forzadas que no sean sistemáticas, secuestros que no sean sistemáticos, pueden ser beneficiarios del indulto", dijo.

Criticó, además, que, de acuerdo con el Marco Jurídico para la Paz, solo serán sancionados los máximos responsables de esos crímenes y no todos los que hayan cometido delitos graves, y que a los primeros se les podría suspender la pena. Dijo que esa norma va contra los estándares internacionales que exigen la investigación y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio. Para él, las penas alternativas son realmente amnistías encubiertas, pues la sanción no es proporcional a los hechos cometidos.

El fiscal dijo que la Constitución de 1991 plantea la posibilidad de limitar derechos y que la obligación del Estado de juzgar e investigar puede entrar en